

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/DSB/M/96

22 de febrero de 2001

(01-0885)

Órgano de Solución de Diferencias
10 de enero de 2001

ACTA DE LA REUNIÓN

celebrada en el Centro William Rappard
el 10 de enero de 2001

Presidente: Sr. S. Harbinson (Hong Kong, China)

Temas tratados:

Página

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada..... | 1 |
| a) | Informe del Órgano de Apelación e informe del Grupo Especial..... | 1 |
| 2. | Estados Unidos - Medidas aplicadas a la importación de determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas..... | 6 |
| a) | Informe del Órgano de Apelación e informe del Grupo Especial..... | 6 |

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada | |
| a) | Informe del Órgano de Apelación (WT/DS161/AB/R - WT/DS169/AB/R) e informe del Grupo Especial (WT/DS161/R - WT/DS169/R) | |

1. El Presidente llamó la atención sobre la comunicación del Órgano de Apelación contenida en los documentos WT/DS161/10 y WT/DS169/10, donde se recoge el informe del Órgano de Apelación sobre "*Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada*", que se habían distribuido con la signatura WT/DS161/AB/R y WT/DS169/AB/R, respectivamente, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 17 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD). De acuerdo con la Decisión sobre los procedimientos para la distribución y supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC, contenida en el documento WT/L/160/Rev.1, ambos informes se habían distribuido como documentos no reservados. Recordó que el párrafo 14 del artículo 17 del ESD establecía lo siguiente: "Los informes del Órgano de Apelación serán adoptados por el OSD y aceptados sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar el informe del Órgano de Apelación en un plazo de 30 días contados a partir de su distribución a los Miembros. Este procedimiento de adopción se entenderá sin perjuicio del derecho de los Miembros a exponer sus opiniones sobre los informes del Órgano de Apelación."

2. El representante de Australia dijo que su país acogía con satisfacción la adopción de los informes y agradeció su trabajo al Grupo Especial, al Órgano de Apelación y a la Secretaría. Australia se alegraba de que se hubiera eliminado o armonizado con las normas de la OMC una amplia gama de medidas que habían discriminado la carne vacuna australiana en el mercado coreano. Había dos elementos diferentes de aplicación: i) las medidas indicadas en la lista de Corea, que habían gozado de un período de transición de siete años, que expiraba el 1º de enero de 2001; y ii) el sistema dual de venta minorista y ciertas prescripciones y prácticas de las autoridades normativas coreanas en materia de carne vacuna. Con respecto a las medidas que gozaban del período de transición de siete años, Australia estaba evaluando los cambios normativos recientemente publicados por Corea y solicitaba una pronta confirmación de Corea de que había derogado todas las reglamentaciones relativas a: i) los recargos a los precios aplicados a las importaciones a través del Sistema de compra/venta simultáneas ("SBS"); ii) las restricciones a la participación en el sistema SBS; iii) el requisito de que la carne vacuna importada a través de la Organización de Comercialización de Productos Ganaderos (LPMO) se distribuyera sólo en el mercado mayorista, al precio mínimo de venta al por mayor fijado por la LPMO; y iv) la discrecionalidad del sistema de concesión de licencias.

3. En relación con las demás medidas declaradas incompatibles con las normas de la OMC, Australia acogía con satisfacción el reconocimiento por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación del efecto discriminatorio del sistema dual de venta al por menor de la carne vacuna importada. Australia tenía ciertas reservas sobre el argumento del Órgano de Apelación de que la separación formal entre productos importados y nacionales en el nivel minorista no daba lugar necesariamente a una incompatibilidad con el artículo III del GATT de 1994. Sin embargo, este argumento no debía en modo alguno permitir a Corea excluir la carne vacuna importada de las tiendas en las cuales se vendía carne vacuna nacional a los consumidores coreanos. Australia se alegraba asimismo de las conclusiones sobre ciertas prescripciones y prácticas de los órganos normativos coreanos. En cuanto a los niveles de ayuda nacional, Australia observaba que el Órgano de Apelación había confirmado las conclusiones del Grupo Especial de que la ayuda interna coreana a la carne vacuna en 1997 y 1998 se había calculado de modo incorrecto. El razonamiento que sustentaba estas conclusiones debería ayudar a todos los Miembros en el cálculo de la ayuda agrícola y en el examen de la observancia de los compromisos contraídos con arreglo al artículo 18 del Acuerdo sobre la Agricultura. Señaló que los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación permitían aclarar los elementos clave del cálculo del nivel de la ayuda nacional sujeto a compromisos de reducción. Por ejemplo, el cálculo de la ayuda nacional debería basarse en la producción con derecho a recibir el precio administrado aplicado, y no en la cantidad real adquirida. Australia creía que dicho enfoque aseguraría que la Medida Global de la Ayuda (MGA) a productos individuales reflejara con mayor precisión la repercusión económica de los mecanismos de apoyo. Los informes también habían dejado claro que, cuando un producto no formara parte de la base de cálculo de la MGA, la MGA Corriente debía calcularse de acuerdo con el Anexo 3 del Acuerdo sobre la Agricultura. El empleo del Anexo 3 como metodología rectora debía conducir a un enfoque más coherente de los Miembros en el cálculo de la ayuda interna. Australia deseaba recibir una aclaración de Corea, en un plazo de 30 días a partir de ese momento, acerca de sus intenciones sobre aplicación, como se establece en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD. Australia estaba dispuesta a entablar debates constructivos con Corea sobre una rápida aplicación.

4. El representante de los Estados Unidos expresó la satisfacción de su país por el hecho de que los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación se encontraran ante el OSD para su adopción. Los informes indicaban que tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación habían analizado los diversos asuntos con meticulosidad y precisión. Agradeció luego al Grupo Especial, al Órgano de Apelación y a la Secretaría su duro trabajo y sus buenos resultados. Los Estados Unidos apoyaban la adopción de los informes, donde se llegaba a la conclusión de que las restricciones impuestas por Corea a las importaciones de carne vacuna eran incompatibles con las obligaciones dimanantes de la OMC. Durante más de 30 años, Corea había mantenido restricciones a la

importación, distribución y venta de carne vacuna importada. Estas limitaciones habían impedido a los Estados Unidos y otros países participar plenamente en un mercado de productos ganaderos en rápida expansión. Los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían coincidido fortuitamente en el tiempo con el final de la aplicación por Corea de un contingente a la carne vacuna, el 31 de diciembre de 2000. En caso de que Corea aplicase las recomendaciones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación y suprimiera los restantes obstáculos al comercio, se encontraría ante la perspectiva de una liberalización completa del mercado de la carne vacuna. Los Estados Unidos agradecían a Corea que ya hubiera iniciado dicho proceso. A partir del 1º de enero de 2001, Corea había modificado sus reglamentaciones en materia de manipulación de carne vacuna importada, con objeto de comenzar a eliminar las distintas limitaciones impuestas a los canales de importación de carne vacuna. Los Estados Unidos se sentían alentados por la iniciativa de Corea y preveían la pronta adopción de medidas similares encaminadas a eliminar las demás restricciones, incluido el requisito de que la carne vacuna importada se vendiera en tiendas especiales.

5. Las conclusiones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían acallado la idea de que sistemas de distribución independientes y distintos para los productos importados y los nacionales, creados y mantenidos mediante iniciativas gubernamentales de obligado cumplimiento, pudieran ser compatibles con las obligaciones dimanantes de la OMC para los Miembros. En Corea, la separación de los sistemas de venta al por menor de carne vacuna importada excluía dicha carne de aproximadamente el 90 por ciento de las tiendas que vendían carne vacuna. Los informes también tenían importancia porque reforzaban el principio de que la carga de demostrar la aplicabilidad de las excepciones generales contenidas en el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 recaía sobre los Miembros que invocaban dicha disposición. Corea había declarado que su sistema dual de venta al por menor era necesario para luchar contra cualquier fraude que conllevara el etiquetado defectuoso de la carne vacuna importada. Tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación habían concluido que, ante la existencia de medidas alternativas compatibles con la OMC para resolver este problema, Corea no podía demostrar que el recurso a una medida no conforme con la OMC fuera necesario. Los Estados Unidos apoyaban plenamente las conclusiones alcanzadas por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación a este respecto.

6. Sin embargo, los Estados Unidos debían expresar su desacuerdo con respecto a las afirmaciones del informe del Órgano de Apelación que parecían legitimar la idea de que, en determinadas circunstancias, se invitaría a los Miembros a enumerar varias medidas incompatibles con la OMC por orden jerárquico, atendiendo a su grado relativo de incompatibilidad. Como ya habían declarado en asuntos anteriores, los Estados Unidos no veían ningún apoyo textual a una interpretación de la palabra "necesaria" que permitiera inferir el análisis complejo que los Miembros que invocaban el apartado b) o el apartado d) del artículo XX estaban obligados a realizar, para establecer la gama completa de medidas que se podían acoger a estas excepciones y que luego debían clasificar en función de su grado relativo de incompatibilidad con las disposiciones del GATT de 1994.

7. Los informes tenían también la virtud de ser los primeros en abordar las disposiciones sobre ayuda interna del Acuerdo sobre la Agricultura y, por lo tanto, constituían un hito en la OMC sobre este asunto transcendental. El Órgano de Apelación y el Grupo Especial habían confirmado que las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura, y en particular su Anexo 3, establecían requisitos obligatorios muy específicos en relación con el cálculo de la Medida Global de la Ayuda Total Corriente. Los Miembros no estaban autorizados a renunciar a las metodologías prescritas en él y, por lo tanto, no podían sustituirlas por cálculos alternativos propios que se adaptaran a sus propios objetivos internos. En caso de que se les permitiera, las disciplinas sobre ayuda interna se verían seriamente socavadas si cada Miembro aplicaba metodologías distintas y potencialmente incompatibles. Los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían tenido plena y correctamente en cuenta la determinación de los Miembros de que el Acuerdo sobre la Agricultura aportara disciplina a las subvenciones internas al imponer la aplicación uniforme de la metodología

establecida en el Acuerdo para el cálculo de la ayuda interna. De este modo, se potenciaba también el objetivo del Acuerdo de reducir al mínimo las distorsiones económicas resultantes en el comercio de productos agrícolas. Los informes sobre esta diferencia representaban un punto de partida válido para la prosecución de la reforma en esta esfera.

8. Los Estados Unidos observaron que, aunque el Órgano de Apelación no había podido confirmar la conclusión del Grupo Especial de que el nivel de ayuda interna de Corea en 1997 y 1998 era incompatible con sus obligaciones, ello se había debido a la ausencia de un solo elemento fáctico necesario para completar dicha conclusión. El Órgano de Apelación había subrayado el hecho de que su incapacidad de llegar a una conclusión sobre este punto no debía confundirse con la afirmación de que Corea hubiera cumplido con sus obligaciones durante todos estos años. Dado que el nivel permisible de ayuda interna descendió cada año durante todo el período de aplicación, Corea vulneraría su MGA si mantenía la ayuda interna en los mismos niveles que los que imperaron en años anteriores o incrementaba ese nivel original. Los Estados Unidos esperaban que Corea se mantuviera alerta ante esta posibilidad a la hora de configurar la ayuda interna a su sector agrícola. Su delegación observaba que Corea, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, debía declarar sus intenciones con respecto a la aplicación en los 30 próximos días. Los Estados Unidos estaban dispuestos a entablar consultas constructivas con Corea para una pronta aplicación.

9. El representante del Canadá dijo que su país había participado en calidad de tercero en esta diferencia, pues le preocupaban desde hacía tiempo ciertas medidas mantenidas por Corea en relación con la importación y el trato deparado a la carne vacuna importada. El Canadá acogía con satisfacción las conclusiones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación con respecto a varias medidas consideradas incompatibles con las obligaciones de Corea dimanantes de la OMC. Corea era el cuarto mercado de exportación de carne vacuna del Canadá en términos de volumen. Dado su fuerte interés comercial, el Canadá instaba a Corea a armonizar sus medidas con las obligaciones que había contraído ante la OMC de manera expeditiva y, en particular, a dar por concluido el sistema dual de venta al por menor de carne vacuna lo antes posible. Una aplicación rápida beneficiaría a las partes interesadas de ambos países. El Canadá esperaba con interés los informes regulares de Corea sobre su aplicación de las recomendaciones del OSD.

10. El representante de Nueva Zelandia dijo que su país había participado como tercero en esta diferencia que, en su opinión, planteaba cuestiones sistémicas significativas en relación con la correcta interpretación de las obligaciones dimanantes tanto del GATT de 1994 como de las del Acuerdo sobre la Agricultura. Nueva Zelandia acogía con satisfacción la resolución del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de que el sistema dual de venta al por menor de Corea para la comercialización y distribución de carne vacuna era incompatible con las normas de la OMC. Nueva Zelandia se alegraba asimismo por la resolución del Grupo Especial, que no había sido impugnada mediante apelación, de que Corea había discriminado las importaciones de carne de bovinos engordados con pastos en beneficio de las de bovinos engordados con cereales. Se trataba de un asunto de gran importancia para Nueva Zelandia por su condición de gran exportador de bovinos engordados con pastos. Nueva Zelandia expresaba también su satisfacción por el hecho de que el Órgano de Apelación hubiera confirmado la opinión de los reclamantes y de Nueva Zelandia de que Corea había calculado incorrectamente su ayuda interna a la carne de vacuno en 1997 y 1998. De este modo, el Órgano de Apelación había realizado una útil aclaración de las normas que rigen el cálculo del sostenimiento interno de los precios del mercado para la agricultura.

11. Cabía destacar que el Órgano de Apelación hubiera confirmado la opinión de que, ante la falta de datos y metodología en los cuadros de documentación justificante de las listas agrícolas, debían aplicarse las disposiciones del Anexo 3 del Acuerdo sobre la Agricultura. Asimismo, en el cálculo del sostenimiento de los precios del mercado debía emplearse la cantidad de producción declarada con derecho a beneficiarse del precio administrado aplicado, en lugar de las adquisiciones reales. La conclusión del Grupo Especial de que Corea había utilizado incorrectamente un precio

exterior de referencia fijo para la carne de vacuno, relacionado con una fase errónea de su proceso de elaboración, constituía también una constatación significativa. Aunque lamentaba que Corea no hubiera facilitado la información que habría permitido que el Órgano de Apelación concluyera su análisis para determinar si Corea había superado sus compromisos en materia de ayuda interna, Nueva Zelandia consideraba que el informe del Órgano de Apelación había contribuido a garantizar que las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura relacionadas con la ayuda interna fueran aplicadas correctamente por los Miembros en el futuro. Nueva Zelandia instaba a Corea a volver a calcular convenientemente su ayuda interna a la agricultura, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura, y a velar por que su ayuda interna total no excediera sus compromisos. Nueva Zelandia esperaba que Corea observara prontamente las resoluciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación.

12. El representante de Corea dijo que su país deseaba agradecer la labor del Grupo Especial, el Órgano de Apelación y la Secretaría. En vista de la importancia de las cuestiones suscitadas por este asunto, Corea deseaba realizar unos pocos comentarios sobre las conclusiones y resoluciones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación. En primer lugar, Corea acogía con satisfacción la resolución del Órgano de Apelación de que el Grupo Especial había incurrido en error al identificar los niveles de compromiso de la MGA de Corea con las cifras que no estaban entre paréntesis. Al propio tiempo, Corea apoyaba plenamente la conclusión del Órgano de Apelación de que las cifras entre paréntesis de su Lista constituían sus niveles de compromiso de la MGA. Esta resolución del Órgano de Apelación concordaba plenamente con las normas de interpretación de los tratados expuestas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En segundo lugar, como cuestión de principio, Corea expresaba su inquietud ante el argumento del Órgano de Apelación de que, al calcular la MGA Corriente para la carne vacuna, Corea no pudiera tener en cuenta los datos constitutivos y metodologías empleados para calcular la MGA Total, porque no se incluía en su cálculo el producto específico en cuestión. Desde el punto de vista de Corea, una comparación entre la MGA Corriente Total con los niveles de compromiso de la MGA sólo podía tener sentido y ser justa cuando se calculaba en función de metodologías y datos comparables. No podía efectuarse una comparación significativa en caso de que una parte de la MGA Corriente Total de un Miembro se calculara utilizando metodologías y datos sobre períodos distintos de los empleados para calcular sus niveles de compromiso. Por este motivo, Corea creía que los datos constitutivos y metodologías empleados en el cálculo de la MGA Corriente Total debían tenerse también en cuenta al calcular la MGA Corriente para la carne vacuna, independientemente de que se incluyera dicho producto en el cálculo de la MGA Total.

13. Por último, deseaba llamar la atención sobre el sistema dual de venta al por menor coreano, que conllevaba el análisis de las obligaciones de Corea con arreglo al párrafo 4 del artículo III y el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. Corea acogía con satisfacción muchas aclaraciones que el Órgano de Apelación había aportado a la interpretación de estas disposiciones fundamentales del GATT de 1994. En particular, Corea se sentía alentada por la aclaración del Órgano de Apelación de que el Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación general de que "toda distinción reglamentaria que se base exclusivamente en criterios relativos a la nacionalidad o al origen de los productos es incompatible con el artículo III". La interpretación del Grupo Especial, si no se hubiera aclarado, habría provocado una distorsión indebida de las obligaciones de los Miembros con arreglo al artículo III. Por otra parte, Corea estaba decepcionada por el hecho de que el Órgano de Apelación no hubiera tenido plenamente en cuenta sus argumentos respecto de la distinción entre las violaciones *de jure* y *de facto* del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, por el que el Grupo Especial no fundamentara sus conclusiones en los datos necesarios, así como por la inclusión en el análisis de las prescripciones del apartado d) del artículo XX del criterio inmotivado de la "compatibilidad". A pesar de estas reservas, Corea aceptaba los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación, y se unía al consenso sobre su adopción. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, Corea debía informar al OSD de sus intenciones con respecto a la aplicación en un plazo de 30 días a partir de ese momento.

14. El representante de las Comunidades Europeas dijo que su delegación no deseaba realizar comentarios sobre el resultado o la substancia del presente asunto. Sin embargo, quería dejar constancia de su desacuerdo en relación con el trato de Corea como país en desarrollo a efectos del Acuerdo sobre la Agricultura. Las CE constataban con sorpresa que Corea había sido tratada como un país en desarrollo a efectos del Acuerdo sobre la Agricultura. Aunque al parecer esta cuestión no había sido objeto de debate, las CE se sentían obligadas a recalcar su desacuerdo con el hecho de que Corea se hubiera calificado a sí misma de país en desarrollo. La fuerza económica de Corea y su condición de importante interlocutor comercial no podía justificar su condición de país en desarrollo de acuerdo con ninguno de los Acuerdos de la OMC.

15. El OSD tomó nota de las declaraciones realizadas y adoptó el informe del Órgano de Apelación contenido en los documentos WT/DS161/AB/R - WT/DS169/AB/R y el informe del Grupo Especial, contenido en los documentos WT/DS161/R - WT/DS169/R, con las modificaciones introducidas por el informe del Órgano de Apelación.

2. Estados Unidos - Medidas aplicadas a la importación de determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas

a) Informe del Órgano de Apelación (WT/DS165/AB/R) e informe del Grupo Especial (WT/DS165/R y Add.1)

16. El Presidente llamó la atención ante la comunicación del Órgano de Apelación contenida en el documento WT/DS165/12, que recoge el informe del Órgano de Apelación "*Estados Unidos - Medidas aplicadas a la importación de determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas*", que se distribuyó, con la signatura WT/DS165/AB/R, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 17 del ESD. De conformidad con la Decisión sobre los procedimientos para la distribución y supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC, que figura en el documento WT/L/160/Rev.1, ambos informes se habían distribuido como documentos no reservados. Recordó que el párrafo 14 del artículo 17 del ESD prescribía lo siguiente: "Los informes del Órgano de Apelación serán adoptados por el OSD y aceptados sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar el informe del Órgano de Apelación en un plazo de 30 días contados a partir de su distribución a los Miembros. Este procedimiento de adopción se entenderá sin perjuicio del derecho de los Miembros a exponer sus opiniones sobre los informes del Órgano de Apelación."

17. El representante de las Comunidades Europeas dijo que su delegación deseaba agradecer la labor del Grupo Especial y el Órgano de Apelación. Las CE tenían el placer de comprobar que tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación habían declarado que las sanciones impuestas por los Estados Unidos el 3 de marzo de 1999 constituían una violación de sus obligaciones internacionales dimanantes del GATT de 1994 y el ESD. En particular, en ambos informes se condenaban claramente las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos en aplicación de la Sección 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974. Uno de los pilares del sistema multilateral de comercio era la prohibición de cualquier iniciativa unilateral, y eso significaba el rechazo claro e incondicional de la proclividad de los Estados Unidos, de conformidad con su legislación nacional, a recurrir a sanciones comerciales unilaterales por decisión propia. Ningún Miembro podía ser juez y parte en una diferencia comercial comprendida en el ámbito de aplicación del sistema de solución de diferencias de la OMC. Creía que este mensaje debía ser recordado enérgicamente. Se trataba de un asunto muy grave para el conjunto de los Miembros, que no se ceñía a este asunto concreto, como demostraba la amplia participación de otros Miembros como terceros en estos procedimientos. Asimismo, las CE constataban con satisfacción que el Órgano de Apelación había desestimado las conclusiones del Grupo Especial sobre la función desempeñada por el Árbitro de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 6 del artículo 22, aunque habrían preferido que el Órgano de Apelación llegara a las conclusiones necesarias sobre la relación entre las disposiciones de los

artículos 21 y 22 del ESD. El informe del Órgano de Apelación confirmaba asimismo que los Miembros aún podían aportar mejoras al ESD. Como habían manifestado en ocasiones anteriores en el Consejo General, las CE se comprometían a trabajar constructivamente sobre este punto en el marco de un ejercicio exhaustivo.

18. El representante de los Estados Unidos dijo que el Grupo Especial estaba en lo cierto al constatar que la medida objeto de esta diferencia ya no estaba vigente, algo que también había señalado el Órgano de Apelación. Además, como había dejado claro el Órgano de Apelación, el problema central en esta diferencia, el de la "secuencia", era competencia de los Miembros. Recordó que, el 3 de marzo de 1999, los Estados Unidos habían modificado los requisitos en materia de fianzas aplicados a los productos procedentes de algunos Estados miembros de las CE, a raíz de la declaración del Árbitro en el asunto de los bananos de que no podría concluir su trabajo para la fecha fijada en el ESD. Las CE habían respondido a dicha declaración el día siguiente, iniciando el procedimiento para la solución de diferencias que culminó en los informes presentados al OSD en la presente reunión. Entre los puntos más destacados de la diferencia figuraba la cuestión de si un cambio de los requisitos en materia de fianzas que tuviera la finalidad de preservar la capacidad de un Miembro de suspender las concesiones previa autorización del OSD, sería incompatible con las normas de la OMC. El Grupo Especial había considerado que así era, y los Estados Unidos no habían apelado esta interpretación.

19. Sin embargo, al margen de la cuestión de los requisitos en materia de fianzas, las CE habían tratado de convertir esta diferencia en un medio de abordar asuntos ya litigados en el caso de los bananos, y de deslegitimar el trabajo de otro órgano contencioso de la OMC y del propio OSD. Dicho de otro modo, las CE habían tratado de llegar a conclusiones sobre el problema de la "secuencia" y sobre el fundamento jurídico de la labor del árbitro de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD en el asunto relacionado con los bananos y de la subsiguiente autorización del OSD de suspender las concesiones. De este modo, las CE habían recabado del Grupo Especial y el Órgano de Apelación aquello que muchos Miembros habían criticado recientemente, es decir, opiniones consultivas e interpretaciones sobre las disposiciones de la OMC innecesarias para la solución de una diferencia, en esferas en las cuales las medidas eran responsabilidad de los Miembros y no de los grupos especiales.

20. Los Estados Unidos se alegraban por el hecho de que el Órgano de Apelación hubiera reconocido que las cuestiones jurídicas en entredicho no guardaban relación con la secuencia, y por el que no fuera necesario que el Grupo Especial abordara esta cuestión. Con respecto a la sugerencia de que el Órgano de Apelación había invertido la conclusión del Grupo Especial sobre el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, señalaron que, en la apelación, fueron los Estados Unidos los que adoptaron la postura de que el asunto de la secuencia no estaba en litigio en esta diferencia. El Órgano de Apelación había coincidido con la postura de los Estados Unidos. Sin duda, los Estados Unidos no sugerían en modo alguno que fuera necesaria una secuencia, algo que tampoco hacía el Órgano de Apelación. Por consiguiente, se carecía de fundamento para concluir que el Órgano de Apelación hubiera invertido la conclusión sustantiva del Grupo Especial de que el ESD no imponía una secuencia: es decir, que el ESD no obligaba a los Miembros a seguir el procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 antes de invocar el artículo 22 del ESD. Simplemente, el Órgano de Apelación había coincidido con los Estados Unidos sobre el hecho de que el Grupo Especial no debía haber planteado esta cuestión para resolver esta diferencia. En primer lugar, el Grupo Especial sólo había abordado esta cuestión porque las CE habían insistido en que lo hiciera. Las CE habían insistido en que la justicia exigía que el Grupo Especial llegara a una conclusión sobre esta cuestión, y el Grupo Especial había acordado responder a la demanda de las CE. Después las CE se habían mostrado decepcionadas por la conclusión del Grupo Especial. En opinión de los Estados Unidos, el Grupo Especial tenía razón al concluir que el ESD no imponía grupos especiales distintos para tratar las cuestiones de la observancia y el nivel de suspensión. El argumento del Grupo Especial sobre este asunto era irrefutable, y los grupos especiales que se vieran obligados en el futuro a tratar esta cuestión deberían

ajustarse a él. Sin embargo, los Estados Unidos consideraban que, aunque el ESD no impusiera la secuencia, muchos Miembros preferían que sí lo hiciera. Como había indicado el Órgano de Apelación, sólo los Miembros podían enmendar o interpretar las disposiciones del ESD. Los Estados Unidos se mostraban dispuestos a debatir con los Miembros sus propuestas sobre este asunto.

21. Los requisitos en materia de fianzas modificados el 3 de marzo de 1999 se habían derogado el 19 de abril de 1999. Así, como ya se ha indicado, esta medida ya no estaba en vigor. Además, en contra de la declaración de las CE, y como el Órgano de Apelación había señalado claramente en su informe, esta medida no guardaba relación con la Sección 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974. Los Estados Unidos, que daban por concluido este litigio, estaban interesados en colaborar con las CE y los demás Miembros sobre las cuestiones sustantivas y de procedimiento implícitas en esta diferencia.

22. El representante del Japón, que intervenía también en nombre de Chile y Colombia, dijo que su país había participado en esta diferencia como tercero. Chile, Colombia y el Japón compartían un interés sistémico por este asunto y habían copatrocinado la propuesta de modificar determinadas disposiciones del ESD.¹ Estos países apoyaban la adopción de los informes y, en particular, consideraban oportuno que el Órgano de Apelación hubiera llegado a una conclusión clara sobre el hecho de que el Grupo Especial había incurrido en error al afirmar que los árbitros nombrados de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD podían determinar la compatibilidad con la OMC, decidiendo que esta declaración no tenía efecto legal. Además, los países en cuestión señalaron la declaración realizada por el Órgano de Apelación en el párrafo 92 de su informe, en relación con la secuencia entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 del ESD. El Órgano de Apelación había afirmado que "determinar lo que deberían ser las normas y procedimientos del ESD no es nuestra responsabilidad ni la responsabilidad de los grupos especiales; se trata claramente de una responsabilidad exclusiva de los Miembros de la OMC". Esta declaración respaldaba la postura de los países en cuestión, en el sentido de que la cuestión de la secuencia entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 del ESD era el problema sistémico más importante de las actuales disposiciones del Entendimiento, y que los Miembros debían resolverlo urgentemente. Chile, Colombia y el Japón, junto con otros Miembros, habían participado activamente en los esfuerzos de mejora y clarificación del ESD, y habían presentado una propuesta con otros copatrocinadores. En su opinión, era el momento oportuno para que los Miembros realizaran nuevos esfuerzos y reactivaran los debates sobre la secuencia entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 del ESD. Un pronto acuerdo sobre esta cuestión reforzaría el carácter multilateral del Entendimiento y sería beneficioso para todos los Miembros.

23. El representante del Ecuador dijo que su país acogía con satisfacción el informe del Órgano de Apelación sobre este asunto. El Ecuador había participado activamente en esta diferencia como tercero, impulsado por dos preocupaciones específicas. En primer lugar, para supervisar atentamente la repercusión de este asunto sobre la diferencia relacionada con los bananos, en la cual tenía un interés comercial sustancial. En segundo lugar, para defender su interés sistémico en la aplicación de la secuencia necesaria entre los artículos 21 y 22 del ESD. Con respecto a la diferencia relacionada con los bananos, aunque el Órgano de Apelación no había tratado específicamente esta cuestión, la decisión que había tomado confirmaba que a las CE no les asistía la razón en su alegación contra las sanciones impuestas por los Estados Unidos. El informe del Grupo Especial, confirmado por el Órgano de Apelación en lo referente a este punto, había velado por que las CE, al presentar su reclamación ante el OSD, no pudieran rehuir las consecuencias derivadas de que no hubieran revisado su régimen de importación de bananos para armonizarlo con las normas de la OMC. Por consiguiente, el Ecuador no se sorprendía por el hecho de que, en la medida en que este asunto estaba relacionado con la diferencia sobre los bananos, las CE y sus Estados miembros hubieran perdido una vez más el litigio. En relación con su interés sistémico por la aplicación de los

¹ Documentos con la signatura WT/GC/W/410 y Add.1/Add.2/Add.3.

artículos 21 y 22 del ESD, el Ecuador había expresado sus puntos de vista de dos maneras: primero, en su escrito ante el Órgano de Apelación y, segundo, al copatrocinar una propuesta de modificación del ESD.

24. En su escrito ante el Órgano de Apelación, el Ecuador había manifestado su acuerdo con la declaración del Grupo Especial en su informe (párrafo 6.135) de que "ninguna violación de las normas de la OMC puede justificar una medida de retorsión unilateral por parte de otro Miembro". El Ecuador sostenía por ello que, cuando se producía una situación en la cual uno o más Miembros discrepaban sobre el hecho de que se hubiera producido o no una violación de las normas de la OMC, el único remedio posible era iniciar un procedimiento de solución de diferencias y resultaba indispensable que el OSD determinara que se había producido una violación efectiva de las normas de la OMC. La posibilidad de un conflicto entre los plazos temporales prescritos por el párrafo 5 del artículo 21 y los fijados en el artículo 22 del ESD no podía justificar la adopción de medidas unilaterales, ni constituir el fundamento para la pérdida de los derechos fundamentales de cualquier Miembro, como el derecho de suspensión de las concesiones. Por este motivo, una interpretación de buena fe del ESD obligaba a las partes en una diferencia en la cual había sido relevante la secuencia entre los artículos 21 y 22 del ESD, a adoptar procedimientos *ad hoc* para evitar conflictos de interpretación legal. No obstante, dichos procedimientos *ad hoc* eran inadecuados, como había demostrado la diferencia relacionada con los bananos. Por lo tanto, el Ecuador, junto con otros Miembros, había copatrocinado una propuesta de modificación del ESD destinada a aclarar las disposiciones relacionadas con la secuencia entre la constatación del cumplimiento y los procedimientos para la suspensión de concesiones, sin prolongar indebidamente el proceso.

25. Cuando el Ecuador decidió copatrocinar la propuesta de enmienda del ESD, lo hizo con el propósito adicional de confirmar que era responsabilidad exclusiva de los Miembros promulgar o interpretar los Acuerdos de la OMC y que este asunto no podía someterse a la competencia del Órgano de Apelación. El Ecuador se mostraba satisfecho porque el Órgano de Apelación había reconocido este punto en el párrafo 92 de su informe. Igualmente, el Ecuador había decidido copatrocinar la propuesta de enmienda pese a las sugerencias de que resultaba inapropiado realizar dicha propuesta cuando el Órgano de Apelación aún no había tomado una resolución sobre la diferencia que nos ocupa. Desde el punto de vista del Ecuador, los Miembros tenían que aclarar que el derecho de proponer mejoras a las disposiciones de los Acuerdos de la OMC no podía supeditarse a una diferencia bilateral, por muy importante que fuera dicha diferencia o por poderosos que fueran los Miembros implicados. Puesto que finalmente el Órgano de Apelación había emitido una resolución en la que reconocía el derecho exclusivo de los Miembros a enmendar e interpretar los Acuerdos de la OMC, el Ecuador esperaba que más Miembros consideraran positiva la propuesta de enmienda del ESD.

26. La representante de Jamaica dijo que su país había participado como tercero en esta diferencia y, aunque no concordaba con todas las conclusiones del Órgano de Apelación, y en particular con la constatación de que la medida del 19 de abril de 1999 difiriera de la del 3 de marzo, acogía con satisfacción la confirmación de la conclusión del Grupo Especial de que la medida de los Estados Unidos del 3 de marzo de 1999 era incompatible con las disposiciones del ESD. Esta conclusión consolidaba la opinión de muchos Miembros, incluida Jamaica, de que el sistema de solución de diferencias era prevalente en la solución de diferencias entre los Miembros. Jamaica observaba con interés la declaración definitiva del Órgano de Apelación en el párrafo 92 de su informe sobre los límites de la responsabilidad del Órgano de Apelación y los grupos especiales en relación con las enmiendas del ESD o la interpretación de los Acuerdos de la OMC. Jamaica esperaba que esta confirmación por el Órgano de Apelación de la jurisdicción exclusiva de los Miembros supusiera un estímulo suficiente para que los Miembros reactivaran el examen del ESD y le dieran una conclusión positiva.

27. El representante de las Comunidades Europeas, en respuesta a la declaración del Ecuador, dijo que deseaba recalcar que el asunto en cuestión no versaba sobre si las CE habían cumplido sus obligaciones en el asunto relacionado con los bananos. Las CE habían querido armonizar primero el régimen aplicado a los bananos con todas sus obligaciones internacionales. Sin duda, a raíz de los recientes debates sobre el futuro del régimen de importación de bananos de las CE celebrados en la reunión del 19 de diciembre de 2000 del Consejo Europeo, este proceso concluiría pronto. El presente asunto se refería al recurso unilateral por los Estados Unidos a sanciones comerciales, en clara violación de sus obligaciones dimanantes de la OMC.

28. El representante del Canadá dijo que su país deseaba comentar las observaciones del Órgano de Apelación relacionadas con el mandato de los árbitros nombrados con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 del ESD. A este respecto, el Órgano de Apelación había concluido que el Grupo Especial había incurrido en error al declarar que la compatibilidad con las normas de la OMC de las medidas de aplicación podía ser determinada por los árbitros nombrados a tenor de dicho párrafo. El Órgano de Apelación había declarado asimismo que la relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 del ESD era una cuestión que debían resolver los Miembros. Señaló que el Canadá era uno de los copatrocinadores de la propuesta, presentada en el Consejo General en su reunión de 10 de octubre de 2000, de enmendar el ESD para resolver, entre otras cuestiones, la de la secuencia. El Canadá esperaba que los intensos debates sobre la propuesta pudieran ahora avanzar lo más rápidamente posible. Algunos Miembros habían sugerido, en otros foros, que no era estrictamente necesario enmendar el ESD, ya que las partes en la diferencia habían podido resolver el problema de la secuencia mediante acuerdos *ad hoc*. Hasta la fecha, estos acuerdos *ad hoc* sobre la secuencia habían dado muestras de gran utilidad a la hora de resolver las deficiencias del ESD. Sin embargo, estos acuerdos requerían el consentimiento de ambas partes. Por lo tanto, era fácil prever que en el futuro se dieran casos en los que las partes no lograran llegar a un acuerdo sobre los pasos adecuados en el procedimiento de administración de una diferencia sobre aplicación. En tal caso, las deficiencias de las actuales disposiciones del ESD se volverían a hacer patentes. Por lo tanto, el Canadá esperaba con interés debatir con los demás Miembros la propuesta de enmienda del ESD durante los próximos meses, con objeto de encontrar una solución permanente y duradera a este problema.

29. La representante de Noruega dijo que su país había tomado nota de que el Órgano de Apelación había declarado en su informe que "el Grupo Especial incurrió en error al declarar que la compatibilidad con la OMC de una medida adoptada por un Miembro a fin de cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD puede ser determinada por árbitros nombrados con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 del ESD" (párrafo 128 b)), y, por consiguiente, concluía que las declaraciones del Grupo Especial sobre esta cuestión no tenían efecto legal. De este modo, el Órgano de Apelación había reconocido la importancia sistémica de esta cuestión, declarando además que era responsabilidad de los Miembros enmendar o interpretar las disposiciones del ESD. El asunto planteado al OSD en la presente reunión demostraba la necesidad de revitalizar el proceso encaminado a la mejora de las disposiciones del ESD. En su calidad de copatrocinadora de la propuesta de enmienda de determinadas disposiciones del ESD, que se había presentado al Consejo General el 10 de octubre de 2000, Noruega instaba a los Miembros a entablar un diálogo constructivo con miras a aclarar la cuestión de la secuencia. A tal efecto, Noruega esperaba con interés las consultas futuras que había de realizar el Presidente del Consejo General sobre la citada propuesta. Reiteró la disposición de Noruega a participar activamente en los debates sobre cualquier otra cuestión que propusieran los Miembros de conformidad con el artículo X del Acuerdo sobre la OMC.

30. La representante de Suiza dijo que, con respecto a la cuestión de la relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, su país no estaba del todo de acuerdo con la interpretación de las disposiciones del ESD que hacía el Grupo Especial. El ESD establecía claramente que los países no estaban autorizados a recurrir al artículo 22 de dicho Entendimiento ni a solicitar la autorización de la suspensión de concesiones u otras obligaciones antes de que se hubiera ultimado el procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21. El Grupo Especial no había tenido

en cuenta el hecho de que los procedimientos establecidos por el párrafo 5 del artículo 21 y por el párrafo 6 del artículo 22 eran diferentes, tenían finalidades distintas y se regían por prescripciones de procedimiento dispares. En caso de que pudiera recurrirse a un procedimiento de arbitraje con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 para determinar la compatibilidad con la OMC de las medidas de aplicación, el párrafo 5 del artículo 21 se volvería superfluo y carecería de efecto. Por consiguiente, no podía hacerse caso omiso del procedimiento establecido en el párrafo 5 del artículo 21. Sin embargo, anteriores casos de solución de diferencias mostraban que el texto del párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 podían interpretarse de maneras distintas. Para evitar cualquier incertidumbre legal en el futuro, los Miembros debían aclarar la relación entre ambas disposiciones lo antes posible. Recordó que 11 países, incluida Suiza, habían presentado una propuesta de enmienda del ESD ante el Consejo General, que incluía las disposiciones de los artículos 21 y 22. Suiza esperaba que se pudiera adoptar pronto esta enmienda. En vista de los debates en curso sobre esta cuestión, Suiza acogía con satisfacción el hecho de que el Órgano de Apelación hubiera actuado con comedimiento y no hubiera intervenido en este debate. Dado que se estaba discutiendo la enmienda del ESD, los órganos judiciales de la OMC debían hacer gala de comedimiento y no anticipar el resultado del debate.

31. El representante de Hong Kong, China, dijo que su delegación creía que la cuestión sistémica más importante formulada por las CE en su apelación era que la compatibilidad con la OMC de una medida adoptada por un Miembro en cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD no podía ser determinada por los árbitros nombrados con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 del ESD. Hong Kong, China, concordaba plenamente con las CE a este respecto. Sin embargo, el Grupo Especial había llegado a una conclusión distinta, como se indicaba en los párrafos 6.117 a 6.126 de su informe. Hong Kong, China, creía que el análisis del Grupo Especial adolecía de serias deficiencias por varios motivos. En primer lugar, a diferencia de lo que ocurría con los informes de los grupos especiales de acuerdo con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, la decisión de un Árbitro no podía ser apelada. El texto del párrafo 7 del artículo 22 del ESD era categórico: "las partes aceptarán como definitiva la decisión del árbitro y no tratarán de obtener un segundo arbitraje". No ocurría lo mismo con los informes de los grupos especiales de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21. Como la reciente diferencia sobre aeronaves entre el Brasil y el Canadá había demostrado, los informes de los grupos especiales podían ser recurridos y de hecho lo habían sido. Si la interpretación del Grupo Especial era correcta, debía alentarse a las partes reclamantes a recurrir al proceso de arbitraje establecido en el párrafo 6 del artículo 22 para determinar la compatibilidad con la OMC, pues así se privaría a la parte demandada de su derecho a apelación. Esta interpretación era contraria al principio de la interpretación efectiva de los tratados, puesto que con ello el párrafo 5 del artículo 21 del ESD se volvería superfluo.

32. En segundo lugar, se fijaban plazos distintos en ambos procesos. El plazo máximo establecido por los árbitros, que era de 60 días, era más favorable para las partes reclamantes que el fijado por los grupos especiales con arreglo al párrafo 5 del artículo 21, que era de 90 días. Una vez más, la interpretación del Grupo Especial era contraria a la interpretación efectiva de los tratados. En tercer lugar, la función de los árbitros presentaba una diferencia fundamental con la de los miembros de los grupos especiales, tal y como se establecía en el párrafo 5 del artículo 21. El párrafo 7 del artículo 22 del ESD fijaba claramente los límites de la función de los árbitros. Hong Kong, China, discrepaba enérgicamente sobre la interpretación liberal del Grupo Especial acerca de las facultades del árbitro con arreglo a la primera frase del párrafo 6 del artículo 22 del ESD. Dicha frase se refería única y exclusivamente a un sencillo ejercicio de cuantificación.

33. Por último, convendría que los Miembros tuvieran presente que los párrafos 6 y 7 del artículo 22 del ESD iban precedidos por el párrafo 2 del artículo 22, que establecía claramente que el párrafo 6 del artículo 22 sólo se aplicaría "si el Miembro afectado no pone en conformidad con un acuerdo abarcado la medida declarada incompatible con él". Dicho de otro modo, la interpretación del Grupo Especial había invertido erróneamente el orden de los procedimientos. Por lo tanto,

Hong Kong, China, acogía con satisfacción la resolución del Órgano de Apelación de que las declaraciones del Grupo Especial en los párrafos 6.121 a 6.126 de su informe carecía de efecto legal. Como había declarado el Órgano de Apelación, no era ciertamente tarea de los grupos especiales ni del Órgano de Apelación modificar el ESD o adoptar interpretaciones en el sentido del párrafo 2 del artículo XI del Acuerdo sobre la OMC. Sólo los Miembros tenían competencia para modificar el ESD o adoptar dichas interpretaciones. Hong Kong, China, acogía con satisfacción la declaración del Órgano de Apelación a este respecto, especialmente a la luz de los acontecimientos recientes en el contexto del asunto relacionado con el asbesto.

34. El representante de Corea dijo que su país también deseaba comentar las conclusiones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación, que planteaban algunas cuestiones sistémicas importantes. En primer lugar, Corea acogía con satisfacción el hecho de que el Grupo Especial y el Órgano de Apelación hubieran confirmado de nuevo que el multilateralismo era un principio fundamental del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. El Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían afirmado que "la obligación de utilizar el mecanismo multilateral de solución de diferencias de la OMC para obtener una determinación de compatibilidad con la OMC, es una obligación fundamental que se aplica en todo el ESD". En el proceso de solución de diferencias debería prestarse constantemente atención a este principio fundamental. En segundo lugar, con respecto a la relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 del ESD, Corea observaba que el Órgano de Apelación había reconocido que dicha relación no debían determinarla los grupos especiales ni el Órgano de Apelación, sino los Miembros. En su calidad de copatrocinadora de la propuesta de enmienda del ESD mencionada por el Órgano de Apelación, Corea esperaba que se aceleraran las deliberaciones sobre la propuesta, con objeto de dar más claridad y fuerza al sistema de solución de diferencias.

35. El representante de Nueva Zelandia dijo que su país coincidía plenamente con la declaración del Canadá y opiniones similares manifestadas por otros Miembros, que recalcan la importancia de dar muestra de la determinación y la capacidad de mando necesarias para encontrar una solución duradera al dilema del párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22. En relación con ello, Nueva Zelandia consideraba que la propuesta presentada conjuntamente en el Consejo General de 10 de octubre de 2000 por varios Miembros, incluida Nueva Zelandia, constituía un punto de partida excelente para futuros debates.

36. El representante de la Argentina dijo que los informes presentados al OSD en la presente reunión abordaban importantes cuestiones sistémicas. Primero, la Argentina acogía con satisfacción el hecho de que tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación declararan incompatible con el párrafo 5 del artículo 21, el párrafo 2 c) del artículo 23, el párrafo 7 del artículo 3 y el párrafo 6 del artículo 22 del ESD las medidas de retorsión adoptadas antes de la autorización por el OSD de la suspensión de concesiones u otras obligaciones, a tenor de la reafirmación del principio de que la determinación multilateral de incompatibilidad de una medida de aplicación con las resoluciones y recomendaciones del OSD debía hacerse con anterioridad a la adopción por la parte reclamante de una medida de suspensión de las concesiones u otras obligaciones. No obstante, la Argentina quería asimismo destacar que discrepaba con la interpretación del Grupo Especial, recogida en los párrafos 6.121 a 6.126 de su informe, de que "el procedimiento de arbitraje conforme al artículo 22 puede constituir un procedimiento de solución de diferencias de la OMC adecuado para realizar la evaluación con respecto a las normas de la OMC ordenada por la primera frase del párrafo 5 del artículo 21 del ESD". El Grupo Especial había considerado justificada esta conclusión por el hecho de que el arbitraje a tenor del párrafo 6 del artículo 22 tenía por finalidad determinar si "el nivel de esa suspensión es equivalente al nivel de la anulación", dándole así la facultad de evaluar si la medida de aplicación había supuesto la anulación o el menoscabo de los beneficios. Hizo hincapié en el hecho de que el Órgano de Apelación no hubiera llegado a una resolución sobre esta cuestión sistémica al formular su opinión de que la medida adoptada el 19 de abril de 1999, tras su autorización por el OSD, era legalmente distinta de la medida del 3 de marzo de 1999. La Argentina no compartía el

punto de vista del Grupo Especial. Esta interpretación era incompatible con el principio de la interpretación efectiva de los tratados y reducía el párrafo 5 del artículo 21 del ESD al nivel de un mero procedimiento alternativo. Del texto del ESD se desprendía claramente que el párrafo 5 del artículo 21 estaba pensado específicamente para aplicarse a los casos de "desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones o a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarcado". El texto del ESD no justificaba la opinión de que el procedimiento acorde con el párrafo 5 del artículo 21 fuera un mero procedimiento alternativo. Por el contrario, el arbitraje establecido en los párrafos 6 y 7 del artículo 22 del ESD se refería únicamente a la determinación de si el nivel de suspensión de concesiones u otras obligaciones era equivalente al nivel de anulación o menoscabo. Por consiguiente, el Grupo Especial había supuesto erróneamente que el mandato de arbitraje establecido en los párrafos 6 y 7 del artículo 22 del ESD incluía la facultad de determinar si se habían observado las recomendaciones del OSD. Desde el punto de vista de la Argentina, nada en el texto del ESD fundamentaba esta asunción, ni el párrafo 5 del artículo 21 del ESD atribuía dicha facultad al Grupo Especial. La Argentina acogería con satisfacción cualquier esfuerzo de los Miembros para resolver el problema de la secuencia entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 del ESD.

37. El representante de Santa Lucía dijo que las cuestiones de procedimiento tratadas en el informe del Órgano de Apelación planteaban importantes problemas sistémicos al conjunto de los Miembros. No se trataba tan sólo de un intento aislado de fijar procedimientos, sino, a un nivel más inmediato, de un intento de legislar sobre el modo de aplicación de las medidas reales sobre comercio; unas medidas que seguían teniendo una repercusión indirecta pero intensa sobre los intereses comerciales de su país, así como sobre los de varios de sus vecinos. Santa Lucía creía que el informe del Órgano de Apelación había reforzado la jurisprudencia de la OMC en varios aspectos. En primer lugar, sobre todo, había desestimado la mayor parte de la sencilla lógica legal del Grupo Especial. Además, había confirmado que, al adoptar la medida de 3 de marzo de 1999, los Estados Unidos habían actuado de una manera incompatible con sus obligaciones dimanantes del párrafo 7 del artículo 3, el párrafo 5 del artículo 21, el párrafo 6 del artículo 22, el párrafo 1 del artículo 23 y el párrafo 2 c) del artículo 23 del ESD. Por consiguiente, el informe del Órgano de Apelación había reafirmado la fuerza del sistema multilateral de comercio y condenado el unilateralismo. No obstante, por algún motivo, el Órgano de Apelación se había abstenido de tratar las cuestiones sistémicas más delicadas, pese a su importancia fundamental, dejándolas sin resolver. La vulneración del sistema basado en normas, que resultaba evidente en la medida adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo de 1999, había seguido vigente después de la medida del 19 de abril de 1999. El Órgano de Apelación había concluido que no procedía la presentación de estas medidas al Grupo Especial, por lo que el dictamen del Grupo Especial sobre estas cuestiones carecía de efecto legal. El principio de la economía jurídica ofrecía al Órgano de Apelación la ocasión de devolver esta cuestión a los Miembros. El que el Órgano de Apelación se abstuviera de tomar una decisión era claramente la opción menos perjudicial que podía adoptar, y Santa Lucía acogía con satisfacción este enfoque. No obstante, como consecuencia de ello, el Órgano de Apelación no había aclarado las cuestiones sistémicas planteadas, dejando así la puerta abierta a ciertas iniciativas que podían tener consecuencias negativas e inciertas para el sistema multilateral de comercio. A la luz de cuanto antecedió, Santa Lucía reafirmaba que el sentido ordinario del párrafo 6 del artículo 22 del ESD, interpretado en este contexto, y en particular el párrafo 7 del artículo 3, el párrafo 5 del artículo 21, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 7 del artículo 22 y el artículo 23 del ESD, sugerían que, en caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones o a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarcado, había que recurrir al párrafo 5 del artículo 21 del ESD antes de determinar el nivel equivalente de suspensión de concesiones en el contexto del párrafo 6 del artículo 22 del ESD. Santa Lucía esperaba que los Miembros confirmaran esta interpretación en el contexto del párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo de Marrakech.

38. El Presidente dijo que se había expresado un número considerable de observaciones y opiniones sustantivas sobre los informes presentados al OSD en la presente reunión, no sólo por parte de las partes o los terceros en esta diferencia, sino también de Miembros que no habían participado en los procedimientos de este asunto. Estaba claro que este asunto particular estaba relacionado en ciertos aspectos con algunas inquietudes sistémicas graves de varios Miembros y, en función del futuro dictamen del Consejo General sobre la propuesta de enmienda de determinadas disposiciones del ESD, podían surgir nuevas oportunidades de intercambiar opiniones sobre estos temas.

39. El OSD tomó nota de las declaraciones y adoptó el informe del Órgano de Apelación recogido en el documento WT/DS165/AB/R y el informe del Grupo Especial, que figura en los documentos WT/DS165/R y Add.1, con las modificaciones introducidas por el informe del Órgano de Apelación.
